¿Y si esperamos los resultados?

Por Álvaro Pezoa

La impaciencia se ha convertido en una característica de la vida política. Se exige a los gobiernos resolver en pocos meses problemas acumulados durante años o incluso décadas, se juzgan sus resultados cuando muchas decisiones apenas pueden comenzar a producir efectos. La administración del Presidente Kast no escapa a esta tendencia. Sin desconocer errores ni controversias, conviene analizar lo realizado y conceder a las políticas públicas el tiempo requerido para demostrar su eficacia. La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social fue publicada, comienza recién a implementarse. Contiene incentivos a la inversión y medidas tributarias, cuyos efectos sobre la actividad y el empleo deberán contar meses para ver frutos. Se ha presentado el plan Chile Despega, orientado a acelerar obras, con el fin de estimular la contratación. Son iniciativas relevantes en un país que precisa recuperar dinamismo económico, aunque es prematuro medir sus logros. En seguridad, el Ejecutivo ha situado el combate al crimen organizado entre sus prioridades. La agenda legislativa incorpora nuevas herramientas para las policías y el sistema penal. La aprobación parlamentaria de las reglas sobre uso de la fuerza y ampliación de los plazos de flagrancia constituyen avances normativos. Su impacto empieza a despuntar, confiando para su plena materialización en una coordinación institucional en marcha. Con todo, otras iniciativas han encontrado objeciones que fuerzan a buscar acuerdos. También cabe apreciar los esfuerzos por reducir el gasto público, agilizar proyectos de inversión y reforzar el control fronterizo. Son ámbitos donde la dirección de las decisiones parece correcta, pero la verificación de resultados contundentes se percibirá en el mediano plazo. La prudencia política exige distinguir entre propósitos, medios y consecuencias. Gobernar no consiste únicamente en declarar objetivos correctos, supone elegir instrumentos adecuados, rectificar cuando sea necesario y perseverar frente a dificultades inevitables. Al respecto, el gobierno tiene el deber de explicar sus decisiones y responder por ellas; la oposición el de fiscalizar. Pero, al país no le sirve que se confunda el legítimo debate público con una disputa incesante por obtener pequeñas ventajas inmediatas. Dar tiempo no significa extender un cheque en blanco. Comporta valorar con criterios razonables y plazos acordes con la naturaleza de cada política. Algunas medidas pueden mostrar efectos pronto; otras demandan mayor continuidad. Chile requiere menos ansiedad por proclamar éxitos o fracasos definitivos y mayor aquello que falta y demandar resultados sin precipitar sentencias es una forma de responsabilidad cívica. Al final, la medida de un gobierno no será la intensidad de sus anuncios ni de sus polémicas, sino el bien concreto que haya logrado para la Nación.

[Pie de foto: Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes]

Opinión
Edición papel digital

Decepción, sensatez y sentimiento

Magdalena Browne
Decana de Comunicaciones y Periodismo
Universidad Adolfo Ibáñez



De acuerdo con el último sondeo de Criteria, la emoción que más provoca el gobierno hoy entre los chilenos es la decepción. Este es un concepto de connotación dual: alude al pesar que se siente cuando la realidad no coincide con lo que se esperaba, pero -según la RAE- también al engaño.

Ya se ha escrito mucho sobre cómo esta administración ha gestionado la política con poca diligencia, en contraste con la destreza que mostró en su campaña electoral. Fue allí donde sembró sobreexpectativas que hoy no logra responder. Ese modo de hacer campaña aquí y en el mundo -de efectismo comunicacional y que tiende a sobresimplificar la solución de problemas complejos- contribuye no solo a que las expectativas no se satisfagan, sino también a que la legitimidad de los gobiernos se desplome y a profundizar la desesperanza ciudadana.

La decepción no se explica solo por expectativas altas; hay bases reales. Los problemas económicos se profundizaron, golpeando la certeza sobre los ingresos de las familias. La desilusión no parece ser solo contingente; podría estar sembrando un *malaise* de época que se asienta especialmente entre los más jóvenes. Ellos, que encarnan el orgullo y los sueños de sus padres -muchos por ser los primeros de sus familias en alcanzar la educación superior-, hoy temen por lo básico: contar con ingresos para costear la calidad de vida a la que aspiraron al estudiar.

Se incuba una brecha generacional de expectativas. Mientras un 44% de los mayores de 55 años cree que el país va por buen camino, solo un 15% de los menores de 35 años piensa lo mismo (Cadem). La brecha entre jóvenes y mayores se extiende también a la percepción positiva de su propia situación económica (38% vs. 49%) y a la comparación con sus padres: un 37% de los jóvenes no siente estar mejor que ellos en materia de ingresos, mientras un 45% de los mayores de 55 cree que sí (Bicentenario-UC). Por décadas, el anhelo familiar se asentó en lograr la movilidad social vía educación superior. Hoy se percibe que ese mecanismo pierde fuerza. A la incertidumbre económica se suma la tecnológica: son los jóvenes quienes más temen que los trabajos sean reemplazados por la inteligencia artificial (UAI-Mutual).

Ante la discusión presupuestaria, las señales del gobierno serán claves. Salir de la decepción requiere sensatez, pero también sentimiento: medidas tanto efectivas como acordes a lo que viven las familias. Pedirle al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, más escucha no es buenismo ni populismo: es una demanda por mejor gestión. Hace un buen rato que los gobiernos modernos complementan la mirada puramente tecnocrática con enfoques como la Nueva Gobernanza Pública, que relevan la confianza ciudadana y la receptividad. Pasar de la decepción a la esperanza no dependerá solo de que mejore el desempeño, ni de que Quiroz sea "mucho más razonable, más realista y lúcido de lo que aparenta", como lo describió el nuevo vocero, Gonzalo Arenas, sino de que las familias sientan que quienes gobiernan realmente entienden lo que les pasa -y las raíces profundas de su desilusión.

¿Y si esperamos los resultados?

Álvaro Pezoa
Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes



La impaciencia se ha convertido en una característica de la vida política. Se exige a los gobiernos resolver en pocos meses problemas acumulados durante años o incluso décadas, se juzgan sus resultados cuando muchas decisiones apenas pueden comenzar a producir efectos. La administración del Presidente Kast no escapa a esta tendencia. Sin desconocer errores ni controversias, conviene analizar lo realizado y conceder a las políticas públicas el tiempo requerido para demostrar su eficacia.

La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social fue publicada, comienza recién a implementarse. Contiene incentivos a la inversión y medidas tributarias, cuyos efectos sobre la actividad y el empleo deberán contar meses para ver frutos. Se ha presentado el plan Chile Despega, orientado a acelerar obras, con el fin de estimular la contratación. Son iniciativas relevantes en un país que precisa recuperar dinamismo económico, aunque es prematuro medir sus logros.

En seguridad, el Ejecutivo ha situado el combate al crimen organizado entre sus prioridades. La agenda legislativa incorpora nuevas herramientas para las policías y el sistema penal. La aprobación parlamentaria de las reglas sobre uso de la fuerza y ampliación de los plazos de flagrancia constituyen avances normativos. Su impacto empieza a despuntar, confiando para su plena materialización en una coordinación institucional en marcha. Con todo, otras iniciativas han encontrado objeciones que fuerzan a buscar acuerdos.

También cabe apreciar los esfuerzos por reducir el gasto público, agilizar proyectos de inversión y reforzar el control fronterizo. Son ámbitos donde la dirección de las decisiones parece correcta, pero la verificación de resultados contundentes se percibirá en el mediano plazo.

La prudencia política exige distinguir entre propósitos, medios y consecuencias. Gobernar no consiste únicamente en declarar objetivos correctos, supone elegir instrumentos adecuados, rectificar cuando sea necesario y perseverar frente a dificultades inevitables. Al respecto, el gobierno tiene el deber de explicar sus decisiones y responder por ellas; la oposición el de fiscalizar. Pero, al país no le sirve que se confunda el legítimo debate público con una disputa incesante por obtener pequeñas ventajas inmediatas.

Dar tiempo no significa extender un cheque en blanco. Comporta valorar con criterios razonables y plazos acordes con la naturaleza de cada política. Algunas medidas pueden mostrar efectos pronto; otras demandan mayor continuidad.

Chile requiere menos ansiedad por proclamar éxitos o fracasos definitivos y mayor disposición a examinar realidades. Reconocer lo que se ha avanzado, advertir aquello que falta y demandar resultados sin precipitar sentencias es una forma de responsabilidad cívica. Al final, la medida de un gobierno no será la intensidad de sus anuncios ni de sus polémicas, sino el bien concreto que haya logrado para la Nación.

ESPACIO ABIERTO

2 minutes to midnight: la crisis que romperá todo

Carlos Correa Bau
Ingeniero civil industrial, MBA



Desde la perspectiva de la comunicación política y la sociología de medios, las crisis de gobierno operan según la premisa de Paul Argenti: no constituyen instantáneas fijas, sino secuencias dinámicas de degradación acelerada institucional. La controversia desatada por los decretos que otorgaron rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales en Chile ilustra con rigor el fenómeno del encuadre noticioso (*issue framing*) y la pérdida definitiva de la agenda por parte del emisor gubernamental.

Una contención tardía y amparada en tecnicismos administrativos produjo un desplazamiento forzado: la cobertura mediática migró desde lo procedimental hacia el cuestionamiento ético y doctrinario. El Ejecutivo intentó catalogar las reducciones penales como mero cumplimiento normativo. Sin embargo, el debate público construyó el relato sobre una disonancia estratégica: la fractura de la propuesta de valor del gobierno de José Antonio Kast, cuya legitimidad electoral descansaba en la premisa punitiva de la "mano dura" y el resguardo de las víctimas, en especial los menores.

En la esfera pública, la ciudadanía decodifica el episodio de una manera distinta y más demoledora a cómo fue narrado. Mientras la autoridad intentó refugiarse en códigos burocráticos, la sociedad procesó el hecho desde una matriz moral elemental: o se respalda a las víctimas o se ampara a los agresores. Para la opinión pública, las rebajas penitenciarias operaron de inmediato como "indultos encubiertos". Ni siquiera el posterior giro del Ejecutivo, que cambió de opinión anunciando que no otorgaría más reducciones de penas, logró mitigar la indignación; la rectificación fue leída como una admisión culposa ante un daño irreparable.

La cobertura periodística profundizó la herida al transparentar la toma de decisiones. La filtración de las alertas desoídas en Justicia y la irrupción del exsubsecretario Luis Silva constituyeron una firme expresión del poco control sobre el tema. Este, al publicar un video afirmando que actuó bajo pauta ministerial y admitir firmas previas a fallos judiciales, dinamitó la disciplina interna. Su remoción no contuvo el daño, pues al sacarlo dejó claro que sigue sosteniendo la decisión de firmar las reducciones, como dijo explícitamente el vocero.

El Presidente no se tomó en serio la crisis como dicen algunos, sino que por razones difíciles de entender decidió sostener a su ministro, cuando lo más sencillo era cambiarlo (y curiosamente lo menos doloroso para Rabat). La advertencia del diputado Raúl Leiva en entrevista a Radio Cooperativa, que podría haber más decretos firmados genera mayor miedo a la oscuridad, pavimentando una Acusación Constitucional que amenaza con fracturar a la coalición de gobierno. Para parlamentarios oficialistas y sectores bisagra, blindar a Rabat resulta insostenible ante sus bases. Sin rumbo para apagar el fuego, cada día puede ser peor para el gobierno, como advirtió proféticamente la expresidenta Bachelet.

LT latercera.com

Declaración de Intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion
Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores en sucursal virtual: http://sucursalvirtual.latercera.com

SANTIAGO DE CHILE | AÑO 77

SU OPINIÓN IMPORTA

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a **lector@latercera.com**

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1400 caracteres con espacios a:
✉ **Email: correo@latercera.com**
📍 **Avenida Apoquindo 4660, Santiago.**
La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones. Las cartas recibidas no serán devueltas.